

C.A. de Concepción

rtp

Concepción, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece MARÍA CRISTINA MELGAREJO SAEZ, R.U.N. 10.222.403-5, Abogada de la Defensoría Penal Publica de la Región del Biobío, coordinadora de defensa de género, en favor de las amparadas:

Andrea Del Carmen Ferreira Hidalgo RUT: 18.821.641-2
RUC: 2400830984-8, Andrea Olimpia Zavala Contreras RUT:
15.954.764-7 RUC: 2201046798-9, Angelina Del Carmen
Zappettini Torres RUT: 15.592.654-6 RUC: 2201079016-K,
Bárbara Aracely San Martín Luna RUT: 18.808.270-K RUC:
2400728885-5, Bárbara Victoria Machuca Muñoz RUT:
19.511.603-2 RUC: 2301190231-6, Berta Isabel Escobar San
Martín RUT: 8.309.180-0 RUC: 2301168219-7, Betsabé Andrea
García García RUT: 20.056.768-4 RUC: 2301154655-2, Camila
Andrea Salas Sanhueza RUT: 17.632.364-7 RUC: 2400197309-2,
Camila Francisca Klauz Quiroz RUT: 18.445.271-5 RUC:
2400542722-K, Carla Viviana Lijeron Heredia RUT: 26.596.256-4
RUC: 2400421050-2, Carolina Georgette Cartes Anabalón RUT:
13.107.629-0 RUC: 2400809926-6, Claudia Andrea Soto Pulgar
RUT: 15.627.147-0 RUC: 2400656145-0, Daniel Edgardo Montoya
Lara RUT: 15.880.353-4 RUC: 2301103788-7, Daniela Anaís
Marín Torres RUT: 21.539.855-2 RUC: 2400315164- 2, Dardy
Fabiola Garrido Troncoso RUT: 11.588.570-7 RUC: 2400359280-
0, Delia Del Carmen Cárdenas Rosales RUT: 19.053.109-0 RUC:
2400656145-0, Elizabeth Nicol Poblete Zúñiga RUT: 18.828.174-5
RUC: 2310046836-0, Estefani Soledad Escobar Valenzuela RUT:
19.372.347-0 RUC: 2400462262-2, Estefanía Estrella Pardo
Muñoz RUT: 18.111.102-K RUC: 2300975610-8, Evelyn Nichols



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXUFXPXSTXU

Silva Valenzuela RUT: 15.456.316-4 RUC: 2300463880-8, Fiorella Paz Muntaner Lorio RUT: 10.621.339-9 RUC: 2310046780-1, Gabriela Elizabeth Aguilera Ortiz RUT: 17.887.421-7 RUC: 2310002393-8, Ingrid Del Carmen Araya Espinoza RUT: 13.015.285-6 RUC: 2400141229-5, Jasmina Andrea Andia López RUT: 17.872.975-6 RUC: 2400361025-6, Jessica Miriam Martínez Pacheco RUT: 17.389.635-2 RUC: 2400285823-8, Jocelyn Marisol Cáceres Acevedo RUT: 17.215.434-4 RUC: 2400189768-K, Johanna Margarita Villegas Torres RUT: 14.898.996-6 RUC: 2301154655-2, Julia Sara Pino Contreras RUT: 10.376.284-7 RUC: 2400148007-K, Lidia Franco Rodríguez RUT: 28.460.138-6 RUC: 2400685796-1, Linda Gabrielle Orellana Barrientos RUT: 19.898.162-1 RUC: 2300188359-3, Lisette Jocelin López Valdebenito RUT: 17.223.979-K RUC: 2110031058-6, Lorena Alejandra Díaz Águila RUT: 14.355.831-2 RUC: 2400343324-9, Luz Marina Contreras Manosalva RUT: 11.245.049-1 RUC: 2301410930-7, Marcela Johanna Bustamante Coloma RUT: 12.181.360-2 RUC: 2400199928-8, Margot Luz Salazar Torres RUT: 19.334.625-1 RUC: 2400136052-K, María Eugenia Cruces Espinoza RUT: 18.685.556-6 RUC: 2300242981-0, María Fernanda Navarrete González RUT: 18.808.694-2 RUC: 2300088311-5, Maritza Alejandra Fuentes Ocares RUT: 15.201.237-3 RUC: 1400703132-8, Maritza Soledad Rodríguez Venegas RUT: 18.405.106-0 RUC: 2400230338-4, Mireya Magali Vidal Olave RUT: 10.639.913-1 RUC: 2400480520-4, Nancy Del Carmen González Sanhueza RUT: 17.550.622-5 RUC: 2400592580-7, Naomí Scarleth Canales Castro RUT: 19.836.199-2 RUC: 2400809927-4, Natali Solange Coloma Pérez RUT: 17.613.952-8 RUC: 2400809005-6, Nicol Andrea Arévalo Arévalo RUT: 19.714.513-7 RUC: 2301192365-8, Nicole Andrea Avaria



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXUFXPSTXU

Carreño RUT: 17.052.555-8 RUC: 2310023016-K, Ninoska Valeska Opazo Sandoval RUT: 18.068.290-2 RUC: 2400230338-4, Patricia Jacqueline Fritz Cerna RUT: 9.887.550-6 RUC: 2400624742-K, Paulina Mabel Acuña Bustos RUT: 18.686.840-4 RUC: 2201011483-0, Romina Elizabeth Romero Sepúlveda RUT: 16.689.711-4 RUC: 2300775466-3, Sonia Del Carmen Zagal Villar RUT: 10.083.122-8 RUC: 2400759857-9, Tamara Andrea Vega Inostroza RUT: 19.717.159-6 RUC: 2400514219-5, Valentina Ignacia Arriagada Caamaño RUT: 20.153.718-5 RUC: 2400696265-K, Yasmín Andrea Pacheco Carrera RUT: 17.449.071-6 RUC: 2300874744-K, Yasna Natali Klocker Espinoza RUT: 17.744.294-1 RUC: 2200706200-5 y Yenny Lucía Sierra Parra RUT: 17.232.634-K RUC: 2400825304-4, todas actualmente en prisión preventiva y recluidas en el Módulo 2 del Complejo Penitenciario Biobío, sección sur, interponiendo acción constitucional de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 inciso 3º de la Constitución Política de la República y auto acordado sobre tramitación y fallo del amparo, a favor de las imputadas ya individualizadas, y en contra de Gendarmería de Chile, representada por su Director Regional (s) de la Región del Biobío, Rodrigo Campusano Yañez.

Indica que, el 15 de mayo del año en curso, las mujeres en prisión preventiva fueron trasladadas a “nuevas” dependencias habilitadas en el Modulo 2 del complejo penitenciario Bio Bio. Sin embargo, en visitas realizadas en conjunto con otras instituciones se han podido detectar que, no obstante que han pasado menos de 2 meses desde su traslado, sus condiciones de infraestructura, habitabilidad, higiénicas, de alimentación, salud y visitas son absolutamente deficientes y que, a la fecha, se encuentran



recluidas 130 mujeres en el Módulo referido, en una cárcel que nunca fue pensada para ellas.

Señala que, existe deficiencia en infraestructura de servicios sanitarios. En la visita que realizaron se constató que los baños comunes del módulo están en el primer piso, de los que solo 4 están disponibles y deben servir a 130 imputadas en las horas de desencierro, que, además, están en mal estado, sin puertas, ni forma de cierre que permita resguardar el más mínimo respeto por la intimidad y privacidad para las mujeres imputadas toda vez que son abiertos a todo quien ingresa al patio del primer piso en donde están ubicados. A mayor refuerzo de estos hechos, imputadas refieren que los baños y duchas se tapan, circunstancia que resulta del todo extraña considerando que el referido modulo lleva funcionando dos meses desde su entrega.

Por otra parte, dice, el módulo solo cuenta con 4 duchas con agua caliente, lo cual no guarda proporcionalidad habida consideración del número de mujeres imputadas en el módulo, las que deben ser ocupadas por aproximadamente 130 imputadas que allí se encuentran recluidas.

Continúa señalando que, también, se constató que, en los lugares destinados al lavado, las lavadoras cuentan con conexiones hechas además de tener condiciones precarias de lavado, lo cual conlleva riesgos de electrocución.

Indica que, al revisar las celdas destinadas a dormitorios, se constató la imposibilidad de cierre de las ventanas, lo que atendido los frentes de mal tiempo y los efectos climáticos que son de público conocimiento en la zona sur, se traduce en humedad y frío extremo que deben experimentar en sus celdas durante las horas de encierro, con las consecuentes enfermedades respiratorias que aquello trae aparejado.



Señala que, un número importante de imputadas refirieron sufrir indigestión, dolores de estómago y síntomas análogos debido al mal estado de la comida suministrada por la concesionaria, ante lo cual se evidenció una efectiva mal preparación y disposición de estas, encontrando bandejas dispuestas ya para su servicio con comidas y ensaladas en parte cocidas y en parte congeladas y de mal sabor.

Explica que, en lo que respecta a atención de salud, son varios los casos de imputadas que dieron cuenta de deficiencias en el acceso a salud dentro de las cuales destacan entre otras:

A) Salud odontológica. Algunas de las amparadas señalan faltarles la totalidad o gran parte de sus piezas dentales, a la sazón Lorena Díaz Águila, Marcela Bustamante, Daniela Torres Arias y Camila Claus Quiroz, refirieron que después de ser trasladadas desde otras unidades penales no pudieron acceder a tratamiento dental en el centro penitenciario actual y ante lo cual Gendarmería refirió que solo accederían a tratamiento quienes tuvieran un caso urgente y no con fines estéticos.

B) Salud especializada. Casos de imputadas que no han recibido atención con los especialistas requeridos como el caso, entre otras, de las amparadas Patricia Jacqueline Fritz Cerna y Berta Isabel Escobar San Martín, que, además representan parte de la población penal mayor de 60 años.

Hace presente, el especial caso de María Fernanda Navarrete González, quien habiendo reportado su compleja situación de salud a la autoridad penitenciaria, donde se indica un estudio de posible cáncer, que requiere derivación a especialista oncólogo, indica que ello no se ha llevado a efecto. Dice que, frente a esta situación, su familia gestionó, por vía particular, una atención de salud privada, sin embargo y no obstante contar con



la previa autorización por parte del tribunal, Gendarmería no trasladó a la amparada perdiendo esta su consulta médica.

Continúa señalando que, las amparadas refieren una grave situación relativa al ejercicio de su derecho a visitas. Señalan que sus familiares son sometidos a revisiones y registros corporales invasivos por parte de los funcionarios de Gendarmería, incluidos niños, niñas y adolescentes que los visitan, los que atentan contra la dignidad e integridad de los mismos y trae aparejado por una parte, que sus familias dejen de visitarlas, con la consecuente afectación a su derecho a tener contacto con el exterior y especialmente con sus hijos/as y familia en general; y por otro lado, para aquellas que mantienen sus visitas, dado el tiempo a que son sometidas a revisión, el tiempo se reduce considerablemente para estar con ellas.

Indica que, el presente recurso se interpone a favor de las amparadas del referido módulo de mujeres, pero cabe hacer presente que afecta a toda la población penal femenina, ya que, en su criterio, las condiciones carcelarias denunciadas en el presente habeas corpus constituye un acto ilegal, arbitrario e injustificado que conculca derechos fundamentales.

Luego realiza la recurrente una serie de apreciaciones jurídicas que expone latamente en su recurso para terminar solicitando que:

1) Declare la ilegalidad de los hechos denunciados y ordene que las actuaciones de Gendarmería se adecúen a la normativa nacional e internacional relativas a personas privadas de libertad, en las materias referidas en esta acción constitucional.

2) Ordene a Gendarmería el arreglo de baños, debiendo disponer la habilitación de la totalidad de los baños del primer piso, y puertas de cierre a cada uno, lo que le permitirá la



necesaria privacidad para las amparadas y acceso a servicios sanitarios.

3) Ordene a Gendarmería el arreglo y en conjunto la habilitación de duchas con agua caliente en las celdas dormitorios o en su defecto que se habiliten todas las duchas en el primer piso del módulo con agua caliente.

4) Disponga a Gendarmería el arreglo de las conexiones en el lugar de los lavados, con conexiones que cumplan las exigencias eléctricas que eviten accidentes.

5) Ordene a Gendarmería el arreglo de las ventanas de las celdas dormitorios, que permita su apertura y cierre al interior de dichas ventanas, para permitir su ventilación, pero también el cierre en los momentos de frío.

6) Disponga a Gendarmería una mejora en las comidas que haga que estas no se sirvan congeladas, ni en mal estado; y se ordene su constante fiscalización.

7) Disponga a Gendarmería el acceso a salud mental, dental y/o interconsultas, coordinando a Gendarmería con la atención de los especialistas que se requiera.

8) Permita las visitas de las amparadas, en tiempo de 2 horas como lo dispone la propia normativa de Gendarmería y se prohíba a los funcionarios encargados de registrar a las visitas realizar registros corporales invasivos que menoscaben o afecten la dignidad de las familias y demás visitas de nuestras amparadas.

9) Se ordene cualquier otra medida destinada a reestablecer el derecho y a hacer cesar las medidas que contrarían la normativa nacional e internacional.

10) Que la presente acción constitucional como su ulterior sentencia sean remitidos a la Unidad de Protección y Promoción



de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, a su Jefe Fernando Mardones, correo electrónico fernando.mardones@gendarmeria.cl, a fin de que la Unidad referida informe a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción las medidas y/o acciones que se adoptarán para evitar la ocurrencia de hechos similares.

Se solicita que estos arreglos se efectúen en el plazo de 30 días, a contar desde el evento en que la presente acción sea acogida.

A folio 23 informa la fiscal judicial de esta Corte, Sra. Silivia Mutizabal Maban quien da cuenta de visita extraordinaria llevada a cabo el 18 de junio de 2024, señalando en síntesis, referente a las amparadas que, hay una interna, Patricia Fritz Cerna en silla de ruedas, quien debe ser movilizada por sus compañeras, Gendarmería no asume esta carga, teniendo su celda en el segundo piso.

El resto de las observaciones no dicen relación con el recurso interpuesto.

A folio 26 informa Gendarmería de Chile, señalando en síntesis que desde el mes de mayo del presente año la población penal femenina imputada fue trasladada al Modulo 2, concesión a cargo de la empresa Sodexo. La dependencia cuenta con 48 celdas, para 4 reclusas cada una. Actualmente hay 139 internas y tiene una capacidad para 192.

En cuanto a los baños, señala que los que se encuentran en las celdas están plenamente operativos y en cuanto a los baños comunes, son ocho en total y todas se encuentran en condiciones de utilización, no cuentan con puertas por razones de seguridad. En cuanto a las duchas, existen ocho, de las cuales 4 tienen agua caliente.



Referente a las ventanas de las celdas, señala que se encuentra semi abiertas, por cuanto se habilitaron de ese modo, para tener una mejor ventilación. Indica que se solicitó la instalación de un sujetador para poder abrir y cerrar las ventanas.

Señala, en lo tocante a la comida, que la alimentación está a cargo de la empresa concesionaria y que es supervisada por Gendarmería, cualquier tipo de observación es subsanada de inmediato.

En lo relativo a los temas de salud denunciados, señala que cuenta con médico y enfermeros y TENS para la población femenina, asimismo, de manera semanal cuentan con atenciones de especialistas.

Respecto a la salud mental, también se cuenta con planes de acción y los casos que requieren especialistas, son derivados al Hospital Regional.

Finalmente en cuanto a las revisiones a las visitas, señala que todo se realiza conforme a la reglamentación vigente al efecto y que no se perjudica el tiempo asignado para ello.

En general, se controvierte que existan las vulneraciones reclamadas, por lo que solicita sea rechazado el recurso.

Con fecha 28 de agosto del presente año, como medida para mejor resolver, la primera sala de esta Corte se constituyó en el Módulo 2 del Complejo Penitenciario Bio Bio, para realizar la diligencia decretada.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución Política de la República o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de



que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Asimismo, puede ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que del tenor la acción incoada lo que se señala como un acto que vulneraría la libertad persona y seguridad individual, serían las condiciones en las que se encuentran las amparadas, en el Módulo 2 del Centro Penitenciario Bio Bio, las que se detallan en la acción interpuesta.

TERCERO: Existen, claramente diferencias entre el recurso presentado y el informe y antecedentes que presenta Gendarmería, que sostiene, en síntesis, que las condiciones en las que se encuentran las internas estaría conforme a la reglamentación vigente, no existiendo las irregularidades que se indican en el recurso.

CUARTO: Que, al no encontrarse de acuerdo las partes en los hechos materia de este recurso, esta Corte se constituyó en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, Módulo 2 para verificar las condiciones relatadas.

Se pudo observar que la comida llegaba a una temperatura adecuada, pero claramente contenía mucho líquido y que no cumplía con el gramaje necesario, cuestión que se le hizo ver a gendarmería.

En cuanto a los baños y duchas existentes en el patio, se pudo verificar que cuenta con 8 duchas, cuatro con agua caliente y 8 baños, que se encontraban en correcto funcionamiento,



excepto solo uno que se encontraba tapado. Mantenían una media puerta en la entrada y cortinas en los WC, que se encontraban separados por un muro.

En este sentido, pese a que el funcionamiento y condiciones de privacidad son adecuadas, claramente el número no es suficiente para todas las internas. En este sentido existen otras dependencias que están destinadas a baños y duchas, en igual número, al extremo contrario del patio, pero se nos informa que se encuentra en proyecto la habilitación de aquellos, en un tiempo indeterminado.

En cuanto a las celdas de las internas, se pudo apreciar que se entraban en condiciones adecuadas de higiene, pero, efectivamente las ventanas se encuentran semi abiertas, por ventilación, pero no pueden ser cerradas y no tienen una manilla para poder hacerlo, lo que hace que sean frías y húmedas.

Finalmente se entrevista a María Fernanda Navarrete González, quien refiere que se encuentra en estudio de un posible cáncer, perdió la hora a médico particular por no haber tenido autorización judicial para poder salir y se encuentra la espera de una consulta en el Hospital Regional.

Además de lo anterior, en el informe de Gendarmería se allegaron a esta Corte informes médicos de tratamiento de las internas, que dan cuenta de atenciones médicas y odontológicas, existiendo además en el Centro atención médica y de enfermería.

En cuanto a las visitas, se informa por el personal de Gendarmería que se cumplen todos los protocolos de seguridad que se requieren en este caso, para evitar que se ingresen elementos prohibidos. Se señala que siempre se cuenta con las 2 horas de visitas permitidas.



QUINTO: En este punto se debe hacer hincapié en el objeto de la acción constitucional de amparo que es, como se señaló, que toda persona que hallare arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución Política de la República o en las leyes o que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, pueda concurrir ante la magistratura para que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Lo anterior quiere decir que, debe existir conexión entre el hecho que se denuncia y alguna privación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual, lo que, de la observación que pudo realizar esta Corte, no ocurre en los hechos, más allá de algunas condiciones particulares que pudieren no cumplir con los estándares esperados, sobre todo para un Módulo nuevo y administrado por una empresa privada.

Así las cosas, ninguna de las deficiencias que pudieron observarse tienen el estándar para poder ser consideradas como un atentado a la libertad personal y seguridad individual, de modo que la presente acción de amparo será rechazada, sin perjuicio de lo que se ordenará respecto de las deficiencias detectadas.

Por lo anterior entonces, las amparadas no sufren privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad individual, con infracción de las normas constitucionales o de las leyes, por lo que la acción deducida será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la



República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de amparo interpuesto en estos autos por María Cristina Melgarejo Sáez, por sus representadas ya individualizadas, sin costas.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención a las deficiencias que se pudieron observar, se ordena que:

- i. Se refuerce por Gendarmería la supervisión a las comidas que se dan en el Módulo 2, para que cumplan con los estándares nutricionales adecuados.
- ii. Se instale, dentro de 30 días desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, manillas o un sistema que permita que las internas puedan abrir y cerrar las ventanas de las celdas.
- iii. Se proceda dentro de los 60 días siguientes a que esta sentencia quede firme, a habilitar baños y duchas en la misma cantidad que las ya existentes -8 baños y 4 duchas adicionales- en el lugar que está destinado a aquello.
- iv. Que, respecto de la interna María Fernanda Navarrete González, se disponga dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que esta sentencia quede firme, que sea llevada a un especialista oncólogo para que revise la situación de salud de la señalada interna, a fin que pueda acceder a los tratamientos que sean pertinentes
- v. Que se habilite un servicio higiénico de uso preferencial para internas con discapacidad en el primer nivel del Módulo 2, dentro del plazo de 30 días desde que la presente sentencia se encuentre firme.
- vi. Que se adecue un baño de la celda que ocupa la interna Patricia Fritz Cerna, a su situación de discapacitada que usa silla de ruedas, dentro del plazo de 30 días desde que la presente sentencia se encuentre firme.



- vii. Que se proceda a la instalación de alcantarillado para recolectar las aguas de las lavadoras de ropa del Módulo 2, dentro del plazo de 30 días desde que la presente sentencia se encuentre firme.

Acordada con el voto en contra de la ministra Nancy Bluck Bahamondes quien, sin perjuicio de compartir las medidas correctivas que se disponen por la Corte, estuvo por acoger derechamente la acción de amparo constitucional, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:

I.-SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL:

Primero: Que efectivamente y tal como se razona por esta Corte, la acción de amparo procede, conforme lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de la República, a favor de quien se encuentra arrestado, detenido o preso, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad individual, con infracción de las normas constitucionales o de las leyes, a fin que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado o afectada. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Segundo: Que en el caso examinado, la Defensoría Penal Pública denuncia, respecto a las internas que individualiza, quienes se encuentran sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva, una serie de condiciones de encierro, que a su entender vulneran la libertad personal, la seguridad individual y la integridad física y psíquica de aquéllas.



Que así las cosas, y antes de examinar dichas condiciones de encierro, lo primero que debe ser dilucidado es la procedencia de la acción constitucional deducida en relación a las conductas que se describen como vulneratorias de la libertad personal y la seguridad individual, imponiéndose aquí una interpretación extensiva de dichos conceptos toda vez que nos encontramos en sede de Derechos Fundamentales, donde lo pertinente es recurrir al principio pro persona como criterio hermenéutico, para aplicar la norma más amplia o la interpretación más extensiva, cuando se trata de proteger derechos humanos, o la que restrinja menos derechos, cuando se trate de una limitación al ejercicio de un derecho humano o su suspensión temporal.

Que de acuerdo a lo razonado, las medidas cautelares aplicadas a las internas en cuyo favor se recurre –en este caso, la de prisión preventiva- sólo pueden afectar su libertad y su seguridad individual, dentro de los límites o parámetros relacionados estrictamente con el cumplimiento de los objetivos para los cuales han sido decretadas, que no es otro que la seguridad de la sociedad y/o de las víctimas o la eliminación del riesgo de fuga, separándolas para ello del resto de la población, en centros especialmente dispuestos para estos fines.

Tercero: Que en este punto, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas de Mandela, establecen en su regla N° 1 que *“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la*



seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.”

Por su parte, la regla N°3 prescribe que “La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.”

A su vez, la regla N° 5 dispone que “El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.”

Estos lineamientos aparecen reforzados en Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las Américas, emanado de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, donde se reconoce “el derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral” y se dispone que “En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.”



Cuarto: Que así las cosas, la privación de libertad como consecuencia de haberse decretado la prisión preventiva de las amparadas, debe ser ejecutada conforme a los fines de dicha medida cautelar, según ya se dijo, y de acuerdo a los parámetros que impone la dignidad humana, de manera que cualquier circunstancia que traspase estos límites infranqueables, agravando indebidamente la privación de libertad, constituye sin duda alguna una afectación a dicha garantía fundamental, y eventualmente también puede violentar la seguridad individual de las internas, lo que trae como lógica consecuencia la absoluta procedencia del recurso de amparo con el objeto de poner término inmediato a las condiciones o factores que provocan esta ilegítima afectación, si ellos resultan acreditados. Dicho de otro modo, el Estado no debe restringir la libertad más allá de los límites estrictamente necesarios.

II.-ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN RELACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD:

Quinto: Que sin perjuicio de la normativa internacional que ya fue analizada en el acápite I, cabe consignar que el artículo 7° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que: *"toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal"*, y el artículo 10 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que *"toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"*.

Por su parte, el Decreto Ley N° 2859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, dispone en su artículo 1° que dicha institución *"es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por*



resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.”

El artículo 15 del mismo cuerpo normativo, mandata que *“El personal de gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana. Cualquier trato vejatorio o abuso de autoridad será debidamente sancionado conforme a las leyes y reglamentos vigentes.”*

En concordancia con ello, la normativa reglamentaria – Decreto N° 518 que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios- establece en su artículo 6 que *“Ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del presente Reglamento.”*

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que, en la medida en que las personas recluidas se encuentran bajo la custodia estatal, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, desarrollando así la teoría de **“posición de garante especial”** frente a las personas privadas de libertad. Señala la Corte en el caso *Montero Aranguren y Otros. Retén de Catia. Venezuela*, que *“En lo que se refiere a personas privadas de la libertad el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la*



independencia o seguridad de los Estados Partes. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano”.

Agrega la Corte que “La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa. Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la medida no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados.

Por otro lado, el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas privadas de libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna”

Sexto: Que de acuerdo a las normas relacionadas, tanto de derecho internacional como interno, no cabe ninguna duda en cuanto a la calidad del Estado de Chile, como garante de la seguridad de las personas privadas de libertad así como de su



obligación de proporcionar condiciones acordes con la dignidad de todo ser humano, cualquiera que sea su condición, y todo ello por medio de las distintas instituciones vinculadas a la administración del sistema carcelario, sin que se puedan esgrimir razones económicas para eludir estas obligaciones de dignidad mínima.

III.- SOBRE LA DENUNCIA EFECTUADA Y LA CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE LAS AMPARADAS CUMPLEN LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA:

Séptimo: Que la Defensoría Penal Pública, en lo que concierne a las amparadas, denuncia diversas deficiencias en las condiciones de habitabilidad de la sección femenina del Complejo Penitenciario Bio Bío, que incluyen higiene, alimentación, salud y visitas, según la siguiente síntesis:

- 1.- servicios sanitarios y duchas, insuficientes y en mal estado;
- 2.-Humedad y falta de aislación en las celdas;
- 3.-Deficiente acceso a las atenciones de salud;
- 4.-Afectación del derecho a recibir visitas como consecuencia del registro invasivo y lento de sus familias.

Octavo: Que al día siguiente en que se desarrolló la vista del recurso de amparo, ante la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, sus tres integrantes se constituyeron, sin aviso previo, en las dependencias del módulo N° 2 del Centro Penitenciario BioBío, pudiendo constatar las circunstancias que se describen en la motivación cuarta del fallo, a lo que se puede añadir lo siguiente:

- 1.-Que una vez ingresados en el módulo N° 2, se concurrió inmediatamente al comedor del establecimiento, donde un grupo



de internas se encontraba almorzando, y esta ministra tomó una de las bandejas de comida, probando una cucharada de cada alimento. En primer término, un líquido a temperatura adecuada – bastante caliente-, en el que flotaban algunos granos sin sabor y pequeños trozos de verduras, que la funcionaria de Gendarmería a cargo de la inspección identificó como “garbanzos”; enseguida, un trozo de tomate muy frío, que formaba parte de una ensalada compuesta por tres pedazos de tomate del tamaño de un gajo de naranja pequeña; y finalmente un poco de gelatina. Asimismo, se constató que varios de los panes entregados a las internas, estaban muy duros y no eran aptos para el consumo.

Entrevistada la nutricionista del establecimiento, ésta informó que a petición de Gendarmería, los horarios de las comidas se estructuran sobre la base de un desayuno que se sirve de 09:00 a 09:30 horas y que consta de una bebida caliente con un pan y un agregado; el almuerzo se compone de una ensalada, un plato de fondo, postre y pan; y la cena se sirve a las 16:30 horas y tiene la misma estructura del almuerzo;

2.-Que las internas utilizan dos lavadoras cuya conexión eléctrica se encuentra en buen estado, pero carecen de sistema de ingreso y salida de agua, de manera que utilizan un balde tanto para llenar los artefactos como para desaguarlos después de cada lavado;

3.-Que se entrevistó a doña Patricia Fritz Cerna, quien se desplaza en silla de ruedas a raíz de la amputación de un pie, y cuya celda se encuentra ubicada en el segundo piso del establecimiento penitenciario. Manifestó que para salir de su celda y regresar a ella, espera que vengan tres internos de la sección masculina que cargan su silla de ruedas. Agregó que para sus necesidades biológicas y para su aseo personal, cuenta con la



ayuda de una interna a la que le entrega “algunas monedas” como retribución por su asistencia. Indica que no desea ser trasladada a otro establecimiento porque quedaría lejos de sus familiares, quienes la visitan.

IV.-SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN PLANTEADA:

Noveno: Que previo al abordaje de la especial condición de las amparadas, resulta útil efectuar una breve reseña sobre el sistema carcelario en Chile, y más específicamente, acerca de la privación de libertad de las mujeres, que no fue considerado un asunto público sino hasta fines del siglo pasado. La Casa de Recogida de Santiago y la Casa de Corrección de Santiago, fueron las primeras instituciones en hacerse cargo de las mujeres que, por diversas razones, eran privadas de su libertad. La primera, estaba destinada a las mujeres arrepentidas por su mala vida; a aquellas enviadas por la justicia en su calidad de "mujeres públicas" o hacia aquellas que, por mandato de sus esposos y familiares, necesitaban corregir sus costumbres. Por su parte, la Casa de Corrección de Santiago nació como un establecimiento semi penal y agrupaba una heterogénea población femenina que incluía detenidas, procesadas, condenadas a presidios en grado menor, medio y máximo, y aquellas que cumplían pena perpetua. Estos mismos centros recibían a las niñas y adolescentes que enviaba el Primer Juzgado de Menores (Memoria Chilena, Biblioteca Nacional).

Con posterioridad, a mediados del siglo XIX, el Estado le cedió la tutela de las mujeres encarceladas a la Congregación del Buen Pastor, con lo que se intensificó el sentido moralizador de la privación de libertad femenina, obligando a las mujeres a involucrarse en la religión, y más específicamente en la religión



católica, con todos sus estereotipos de género en torno a la santidad de lo femenino y los roles como madre y esposa. Muy claras son las palabras que el presbítero Mariano Casanueva pronunció en 1864, en la inauguración de la Casa Correccional: “La prisión por dura que se suponga, bien ha de servir para dar cumplida satisfacción a la vindicta pública, ha de atender especialmente a corregir, a santificar al culpable Al confiar esta casa a las religiosas del Buen Pastor no nos proponemos tan sólo fomentar la piedad cristiana en sus moradores; a la piedad es fuerza que la acompañe la laboriosidad Esta misma casa atestigua los males que la ociosidad engendra. Su historia nos dice, que aquí no llega la mujer honrada y laboriosa Sobre todo debe hacerse amar el trabajo a la que ya sabe lo que es el crimen; a la que no conserva el candor propio de su sexo” (**"Mujeres viciosas, mujeres virtuosas. La mujer delincuente y la Casa Correccional de Santiago de Chile, 1860-1900"**. Zárata, María Soledad).

Sólo en el año 1996 la Congregación del Buen Pastor hizo entrega al Estado del último recinto a su cargo, con lo que se pudo eliminar la tutela religiosa sobre el sistema penitenciario femenino, y la población de mujeres privadas de libertad comenzó un lento proceso de visibilización, pero que está muy lejos de superar el estadio de grupo especialmente vulnerable, permaneciendo atadas hasta el día de hoy a lo que la autora Carmen Antony García denomina el “análisis androcéntrico de la cárcel”.

Décimo: Dicho lo anterior, resulta pertinente preguntarse si las condiciones deficitarias constatadas por esta Corte, en el módulo 2 del Complejo Penitenciario Bio Bío, y a las que ya se ha hecho referencia, requieren un enfoque de género o si, por el



contrario, se trata de circunstancias que han de ser resueltas de igual forma, tanto para la población femenina como masculina que ingresa a los Centros Penitenciarios en nuestro país.

Undécimo: Quien disiente, parte por afirmar que la obligación del Estado en orden a proporcionar condiciones dignas y adecuadas para las personas privadas de libertad rige no conoce, o no debe conocer, sobre cuestiones de género, sexo, religión, origen, condición social, edad, religión, color, nacionalidad ni de ninguna otra característica que diferencie a los seres humanos en cuanto a su individualidad que pudiera llevar al Estado a propinar tratos discriminatorios.

Que diferente asunto es el que dice relación con los grupos especialmente vulnerables de la población, y sus particulares necesidades, que en el caso que nos ocupa, son las mujeres privadas de libertad.

Tal y como refiere la autora María de los Ángeles González Coulon en “Mujeres olvidadas: la realidad femenina tras las rejas”, publicado en la obra Género, Justicia y Proceso, citando a diversos autores, “la prisión tiene género”, “está diseñada por hombres y para hombres”, lo cual agrava el castigo penal de las mujeres. Añade la autora, que esta posición desventajosa no sólo se debe a las diferencias biológicas, que generan necesidades especiales que no son atendidas, sino que, en razón de los roles de género y normas sociales, se tiene una percepción distinta de las mujeres delincuentes, quienes resultan doblemente castigadas, por las leyes y por el mandato de género.

Duodécimo: Con todo lo relacionado, no puede caber duda alguna en cuanto a la necesidad de aplicar perspectiva de género a la hora de resolver el amparo deducido ante esta Corte, desde que el sistema carcelario no es neutro, en tanto ha sido diseñado



por hombres, con una perspectiva androcéntrica, y en que el Estado ha invisibilizado históricamente a las mujeres privadas de libertad, según se ha dicho, entregando su cuidado a privados y luego a órdenes religiosas, que han intensificado los estereotipos y sesgos que tradicionalmente agobian a las mujeres, desatendiendo completamente las necesidades femeninas, al punto de construir sólo cárceles para hombres, en las que se “adecúan”, determinadas dependencias o módulos para recibir a mujeres.

Décimo tercero: A este respecto, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No discriminación, entiende la perspectiva de género como un método o herramienta de análisis, destinado al estudio de las construcciones culturales y las relaciones sociales que se tejen entre hombres y mujeres, identificando en su trasfondo, aquellas formas de interacción que marcan pautas de desigualdad y discriminación entre los géneros y, desde el punto de vista de la función jurisdiccional, esta perspectiva contribuye a realizar el derecho a la igualdad.

Por su parte, y en relación al asunto examinado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 2 señala que *“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”*.

Las Reglas de Bangkok, “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la



libertad para las mujeres delincuentes y sus Comentarios” disponen que *“a fin de poner en práctica el principio de no discriminación consagrado en el párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de las presentes Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá considerarse discriminatoria”* (Regla 1º). Agrega este instrumento que *“Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”* (Regla 5º).

Finalmente, vale la pena destacar el caso Penal Miguel Castro Castro, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere por primera vez a las consideraciones de género al examinar la responsabilidad del Estado, señalando, entre otras cosas, que *“al analizar los hechos y sus consecuencias la Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres”*. En este pronunciamiento, la Corte también considera la desatención a las necesidades biológicas femeninas, de aseo e higiene.

Décimo cuarto: Que, por otra parte, conviene tener presente que una mujer privada de libertad se encuentra, simultáneamente, en diferentes escenarios de vulnerabilidad, lo que se relaciona con lo que la doctrina denomina



“interseccionalidad”, que constituye una metodología o herramienta para la investigación en el ámbito de la justicia social.

Comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea (por ejemplo, una mujer puede ser una médica respetada pero sufrir violencia doméstica en casa). El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad (Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica, Alison Symington, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), en www.awid.org).

En el recurso deducido y sin necesidad de mayores análisis, confluyen a lo menos tres factores o identidades que originan e intensifican la vulnerabilidad de las amparadas, y que las hacen víctimas de un trato discriminatorio. Primero, son mujeres, están privadas de libertad y en general padecen condiciones de precariedad económica y social, y cada una de estas identidades requiere una especial atención y la adopción de medidas que tiendan a eliminar la brecha que existe entre quienes presentan



estas particularidades y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Décimo quinto: Que, retomando el examen de las diferentes situaciones que esta Corte pudo constatar en la visita inspectiva realizada como medida para mejor resolver y con todo lo expuesto y razonado:

1.- Respecto al número de baños y duchas comunes, según se observó y es reconocido por Gendarmería de Chile, para un módulo con capacidad para 190 internas se cuenta con 4 duchas provistas de agua caliente y otras 4 con agua fría. Completan la infraestructura, 8 WC. Dichas instalaciones están en buenas condiciones y operativas. En cada ducha existe una cortina plástica para otorgar alguna privacidad y en el ingreso al lugar, existen dos “medias” puertas batientes.

Que en este acápite no caben las ambigüedades ni los eufemismos y entonces cabe recordar que las mujeres tienen necesidades especiales de aseo e higiene, que no están presentes en el mundo masculino, derivadas fundamentalmente del período menstrual, que dura varios días, que provoca olores y que muy frecuentemente mancha con sangre la ropa interior y también exterior, en algunos casos. Todo esto convierte la ducha con agua caliente en una necesidad de primer orden ya que no es lo mismo la limpieza de un cuerpo sin sangre que el aseo durante el período menstrual. Y en este contexto las 4 duchas con agua caliente que tienen a su disposición las amparadas y las otras internas del módulo 2, no satisfacen ni mínimamente sus requerimientos más básicos. Y algo similar ocurre con los 8 WC operativos. Además, es sabido que prácticamente el 50% de las mujeres padecen o han padecido alguna vez inflamaciones de la vejiga o sistitis, que aumentan exponencialmente en ambientes



con higiene deficiente, lo que provoca micciones recurrentes y por lo tanto el número de baños también es absolutamente insuficiente atendida esta particular circunstancia.

Por estas consideraciones, Gendarmería de Chile, tal como lo indica el fallo que precede, debe habilitar agua caliente en todas las duchas y al mismo tiempo, instalar 8 más.

2.- En lo que concierne al lavado de ropa, cabe señalar que si bien existe un sistema centralizado y que las internas pueden enviar, una vez por semana, hasta tres kilos de ropa, ello no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población femenina por las mismas razones antes anotadas, relacionadas con el período menstrual, que provoca una mayor utilización de prendas que se manchan con sangre. Desde otro punto de vista, pero en directa relación con este acápite, y solo por vía de ejemplo, si una interna mancha su ropa interior un día lunes y el lavado centralizado se realiza el viernes siguiente, atendido el número de días que transcurren, lo más probable es que no sea posible eliminar la sangre que se queda pegada a la prenda y que en definitiva, la inutiliza.

En este punto, resulta indispensable que, junto con aumentar la frecuencia del lavado centralizado, a dos días a la semana, Gendarmería de Chile debe habilitar las lavadoras que las internas utilizan en el mismo módulo 2, completando el sistema operativo con las mangueras que permitan conectarlas con la red de agua, tanto para el llenado como para el desagüe.

Décimo sexto: Que, por otra parte, respecto a las ventanas de las celdas y a la alimentación, cuyas condiciones se describieron en el motivo octavo de esta prevención, para quien la suscribe no concurren condiciones que permitan o hagan necesario utilizar la perspectiva de género, desde que tanto



hombres como mujeres tienen requerimientos similares en estas materias, sin perjuicio de lo cual, y teniendo presente que son situaciones que se incluyen en la acción de amparo, cabe añadir respecto a la alimentación, que según se constató, ésta es completamente deficitaria y no cumple con las exigencias que se le han formulado a Sodexo en cuanto a gramaje ni calidad. El líquido que se pretendió hacer pasar por “garbanzos” no constituye un almuerzo que satisfaga los requerimientos de un adulto, sobre todo teniendo presente la pobreza del desayuno que sólo consiste en un líquido caliente y un pan “con agregado”, el que no fue detallado por el personal consultado.

Por otra parte, llama la atención de esta ministra, el tiempo transcurrido entre el almuerzo y la “cena” y entre la “cena” y el desayuno, todo en función de los requerimientos de Gendarmería. En efecto, y según se informó por la nutricionista presente en la visita inspectiva, el desayuno se sirve a las 09:00 horas; el almuerzo a partir de las 11:45 horas; y la cena a las 16:00 horas. Es decir, entre la cena, que repite las deficiencias del almuerzo, y el desayuno del día siguiente, transcurren aproximadamente 16 horas, de manera que la necesaria conclusión es que las amparadas y el resto de la población penal, pasa hambre, lo que agrava ilegítimamente las condiciones de su privación de libertad, lo que constituye un incumplimiento de los deberes de Gendarmería, que debe fiscalizar el proceso de distribución de los alimentos al interior del recinto carcelario de que se trata, acápite en el que resulta pertinente señalar que la profesional nutricionista reconoció que el día de la visita no revisó la comida que se le entregó a las amparadas, lo que resulta lógico si se tiene presente que para todo el penal, sólo ella tiene a su cargo verificar el alimento que entrega la empresa Sodexo.



Así las cosas y a entender de quien disiente, la recurrida debe elaborar un protocolo de revisión de todos los alimentos que prepara Sodexo con el objeto de asegurar la cantidad, calidad y temperatura de dichas comidas, especificando en qué horario se hará la revisión, sobre qué aspectos debe versar, qué funcionarios se harán cargo de esta tarea; todo ello debidamente asesorados por la profesional nutricionista y en el plazo de 20 días.

Además se debe disminuir la brecha de tiempo entre la cena y el desayuno a lo menos en una hora y media.

Décimo séptimo: Que un análisis separado amerita la situación de las internas Patricia Fritz y María Navarrete.

En lo que concierne a la primera, y tal como se describió en la motivación octava de quien previene, la amparada se desplaza en silla de ruedas y depende de la ayuda de tres internos varones para ingresar y salir de su celda, que está ubicada en el segundo piso. Además requiere ayuda para asearse y para ir al baño.

En este caso, a los factores de interseccionalidad comunes a todas las recurrentes se une la condición de discapacidad física de doña Patricia, la que Gendarmería de Chile ha obviado completamente, desde que ninguna de las dependencias del recinto penitenciario está habilitada para sus especiales necesidades, en abierta infracción a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, y según la cual, la Estados Parte observan con preocupación que *“las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo”* y se reconoce que *“las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese*



respecto, se adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

En consonancia con la normativa internacional, la Ley N° 20.422, que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, reconoce como principios básicos en esta materia, entre otros, el de Diseño Universal, definido como la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible; y la intersectorialidad, que aquí es definida como el principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.

En el caso que nos ocupa, estas políticas públicas, aplicadas en el ámbito penitenciario han invisibilizado completamente a esta amparada, ignorando sus necesidades más primarias y obligándola a recurrir a otros internos e internas, para que la trasladen y la ayudan con la satisfacción de sus necesidades más básicas, lo que conlleva un despojo de su dignidad.

Así las cosas, para este voto de minoría, a su respecto Gendarmería de Chile debiera adoptar las siguientes medidas, en el plazo máximo de 30 días: elaboración de un protocolo de atención para todas las mujeres privadas de libertad que presenten algún grado de discapacidad; la adquisición de un retrete o baño portátil que le permita a la amparada disminuir los desplazamientos; la adquisición de un piso o silla de ducha que



habilite a la interna para asearse con autonomía. Por otro lado, resulta inaceptable que los desplazamientos de doña Patricia Fritz dependan de otros internos, en tanto debe ser el personal de Gendarmería o el personal sanitario del recinto penitenciario, quienes se ocupen de estas tareas. Por otro lado, en el mediano plazo, con un máximo de seis meses, la recurrida debería instalar un baño diseñado para personas con discapacidad y que esté ubicado en el primer piso del recinto.

Finalmente, en lo que concierne a la situación de salud de doña María Fernanda Navarrete González, nuevamente nos encontramos con la aparición de un nuevo factor de vulnerabilidad que agrava su encierro, esta vez relacionado con su estado de salud, el que a su vez dice relación con una eventual enfermedad propia de las mujeres, como es el cáncer de mamas, a cuyo respecto Gendarmería debe arbitrar la medida que se ordena en este fallo y además permitir, de manera expedita y para el sólo evento que el sistema de salud público no cuente con horas médicas de especialista, que la familia de la amparada gestione dicha atención de salud, luego de lo cual Gendarmería debe obtener los permisos de traslado que sean necesarios con el objeto de utilizar el mencionado cupo.

V.-SOBRE LOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR ESTA JUDICATURA.-

Décimo octavo: Que resulta necesario recordar que la defensa de Gendarmería de Chile no opuso ningún tipo de excepción relacionada con sus obligaciones legales o reglamentarias, ni con eventuales dificultades para cumplir lo que las amparadas pretenden por medio de esta acción constitucional. En síntesis, la recurrida se ha limitado a negar la existencia de cualquier actuación ilegal o arbitraria o déficit



estructural, alimenticio o de salud en una defensa que ha sido desvirtuada, al menos parcialmente, por esta propia Corte de Apelaciones en visita inspectiva.

Por otra parte, cabe recordar el rol de garante del Estado de Chile en relación a la libertad, seguridad y condiciones de encierro de las mujeres privadas de libertad, en conformidad a los Tratados Internacionales suscritos por Chile y a la propia normativa interna.

Enseguida, es indispensable traer a colación las decenas, o incluso los cientos de fiscalizaciones y revisiones a los distintos centros penitenciarios del país, por distintas autoridades e instituciones relacionadas con el sistema de justicia, incluidos los Tribunales, sin que ello implique cambios sustanciales ni mejora en las condiciones en que las internas cumplen la privación de libertad. Parece ser que la perspectiva de género y la interseccionalidad sólo sirven, en este caso, como herramientas de análisis doctrinario y jurisprudencial, pero no consiguen provocar un cambio positivo en la vida de estas mujeres, las que por cierto, y según lo observado en la visita inspectiva, pese a sus precarias condiciones, mantienen sus celdas limpias y ordenadas, utilizando incluso adornos e introduciendo pequeñas mejoras a costa de sus propios y escasos recursos.

Por estas consideraciones, resulta necesario involucrar en el cumplimiento de las medidas ordenadas por esta Corte a las distintas reparticiones del Estado de Chile que tienen responsabilidad en las condiciones materiales de los recintos penitenciarios al asumir obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, las que no pueden seguir esperando más, debiendo remitirse, a entender de esta ministra, para su estricto cumplimiento, una



copia de esta sentencia al señor Ministro de Justicia, a la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, al señor Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema y finalmente, al señor Presidente de la República, sobre quienes recae principalmente el deber de garantía y seguridad del ya se habló.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante José Andrés Valenzuela Farías y el voto en contra, su autora.

N°Amparo-398-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXUFXPXSTXU

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Nancy Aurora Bluck B., Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. y Abogado Integrante José Andrés Valenzuela F. Concepcion, cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXUFXPXSTXU